



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0348/2017

FECHA: 21 de septiembre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0348/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Por escrito de 25 de enero de 2017, el ahora reclamante solicitó a la Consejería de medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y siguiente de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Directiva 3/2004, de relativa al acceso del público a la información medioambiental, la siguiente información medioambiental, según el artículo 2.3 de la Ley 27/2006:

1. *Permisos, autorizaciones y concesiones mineras (incluidos prestamos) en los municipios de Paracuellos del Jarama, Rivas-Vaciamadrid, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares, Arganda del Rey y Loeches, así como el titular, título minero, vigencia, coordenadas, tipo de material, así como cuantas modificaciones de las mismas hayan sido solicitadas y/o aprobadas desde su otorgamiento hasta la fecha.*
2. *De cada uno de dichos permisos, los siguientes documentos desde su otorgamiento hasta la fecha incluidas sus modificaciones: (I) Planes de Explotación, (II) Estudios de Impacto Ambiental (III) estudios arqueológicos, (IV) Declaración de Impacto Ambiental, (V) Planes de restauración.*

ctbg@consejodetransparencia.es



3. *De cada uno de los permisos mineros, informes del órgano ambiental con relación al seguimiento de los Planes de Labores anuales y Planes de Restauración desde el año 2005 hasta la actualidad.*

Mediante oficio de 18 de abril de 2017 de la Subdirectora General de Energía y Minas de la indicada Consejería se traslada al ahora reclamante, en síntesis, lo siguiente:

- *De conformidad con el artículo 4 de la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería la Comunidad de Madrid cuenta con un Registro Minero, que consiste en un archivo público permanentemente actualizado de todos los derechos mineros existentes en nuestra Comunidad Autónoma. Estos datos son suministrados al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, elaborándose el denominado Catastro Minero que puede ser consultado en Internet en la dirección web*

<https://geoportal.minetur.gob.es/CatastroMinero/BusquedaBasica.do>,

Entre los datos recogidos en el Catastro minero figuran el tipo de derecho minero, su denominación, el recurso explotado a superficie, su número de registro, su estado administrativo y su situación, con su mapa correspondiente. En el propio escrito de referencia se indica que, como anexo al mismo, se remiten al interesado la relación de derechos mineros existentes en los municipios indicados en escrito de solicitud.

- *En cuanto a la información de los denominados "préstamos", se traslada al interesado que, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, respecto a los aprovechamientos de recursos de la Sección A) destinados a obras públicas dirigidas o inspeccionadas por organismos dependientes del "Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo", cualquiera que sea el sistema de su ejecución, quedará atribuido a este Departamento, sin perjuicio de dar cuenta e efectos estadísticos del comienzo y término de los referidos trabajos a las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, y, anualmente, de las cantidades de materiales extraídos. Este mismo criterio se seguirá en lo que respecta a las obras efectuadas por el "Ministerio de Transportes y Comunicaciones". Debiendo ser entendida en la actualidad las referencias indicadas a los departamentos ministeriales que correspondan, en su caso. Sobre este particular, no constan datos comunicados a esta Dirección General en los municipios solicitados.*

- *Con relación a los planes de restauración, se indica que se están preparando copias, de aquellos aprobados en el marco del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, los cuales serán puestos a su disposición previo abono de las tasas preceptuadas en la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid (Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre). Añadiéndose, finalmente, que dado, el volumen de la*





documentación solicitada y la complejidad de los trabajos necesarios para realizar las copias, puesto que se incluyen planos de gran formato, imposibilita cumplir el plazo de un mes establecido con carácter general para facilitar esa información, por lo que se hace necesario ampliar en un mes el plazo para su remisión, de conformidad con el artículo 10 de la citada Ley 27/2006, de 18 de julio.

Por Resolución del Director General de Industria, Energía y Minas de 24 de abril de 2017, se resuelve denegar la solicitud de acceso a las memorias de los recursos de la sección A), los proyectos de aprovechamiento de recursos de la sección C), y los planes de restauración aprobados de conformidad con el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, de las explotaciones mineras incluidas en los municipios de *Paracuellos del Jarama, Rivas-Vaciamadrid, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares, Arganda del Rey y Loeches.*

A través de un Oficio 8 de junio de 2017 de la Subdirectora General de Energía y Minas de la indicada Consejería se traslada al ahora reclamante, que se encuentra a su disposición en la sede de dicha unidad, copia de la documentación siguiente: Proyecto de modificación del Plan de restauración del espacio natural afectado por la explotación "VALDERRIVAS" Nº A105 (diciembre 2011); Plan de restauración del espacio natural del proyecto de explotación correspondiente a la 1ª prórroga de la explotación "MORATA II FRACCIÓN 2ª" Nº 2756-003 (enero 2015); Modificación del proyecto de restauración del espacio natural derivado de la extensión en profundidad de la explotación "VALDECUBILLOS" Nº1 2838-011 (abril 2012); Plan de restauración del espacio natural afectado por la explotación "MORATA VALDERRIVAS" Nº 2809-001 (abril 2014).

En paralelo a estos escritos, el ahora reclamante solicita que la información se le facilite en formato electrónico. Por parte de la administración autonómica se le traslada la necesidad de darse de alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, mediante Resolución del Director General de Industria, Energía y Minas de 8 de septiembre de 2017 se resuelve, por una parte, conceder acceso a los proyectos de aprovechamiento de los recursos de la sección C) otorgados mediante concesión directa y a los planes de restauración aprobados de acuerdo con el Real decreto 975/2009, de 12 de junio, en los municipios de *Paracuellos del Jarama, Rivas-Vaciamadrid, Velilla de San Antonio, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares, Arganda del Rey y Loeches*; y, por otra parte, denegar el acceso a las memorias de los recursos de la sección A) , los proyectos de aprovechamiento de recursos de la sección C) otorgados mediante concesión derivada de los permisos de investigación y los planes de restauración aprobados de acuerdo con el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre.



2. Por escrito registrado en esta Institución el 19 de septiembre de 2017, el interesado interpone una reclamación solicitando la intervención de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas para que facilite la documentación relativa de todos los proyectos mineros solicitados, utilizando para ello la vía electrónica, tal y como prevé el art. 22 de la ley 19/2013.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones de la LTAIBG el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 LTAIBG –BOE, n.13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su



ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Precisadas las reglas sobre competencia orgánica para dictar la presente Resolución, la primera cuestión sobre la que ha de centrarse la atención se refiere a la determinación del ámbito de aplicación de la LTAIBG.

La Disposición Adicional Primera, apartado 2, de la LTAIBG regula los procedimientos especiales de acceso a la información señalando lo siguiente:

“Se regirán por su normativa específica y por esta Ley, con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.”

La misma Disposición Adicional, en su apartado 3, dispone que

“esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización”.

Es decir, la LTAIBG reconoce expresamente su carácter supletorio respecto de las materias amparadas por la regulación específica de aplicación al acceso a la información ambiental. En efecto, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente define la información ambiental, en su artículo 2.3, como toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones:

- a. *“El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos*
- b. *Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a.*
- c. *Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.*
- d. *Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.*
- e. *Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c, y f.*



- f. *El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b y c”.*

En definitiva, tal y como se ha considerado en anteriores reclamaciones -entre otras, la número R/0076/2016, de 30 de mayo- teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, este Consejo de Transparencia considera que se debe inadmitir la Reclamación presentada en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al carecer de competencias para entrar a conocer el fondo del asunto debido a la aplicación prevalente de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **INADMITIR** la reclamación presentada, por aplicación de los apartados 2 y 3 de la Disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Esther Arizmendi Gutiérrez

